JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por Ruth Gordons Castañeda contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV- Radicado 2021-00022-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita la actora que se le ampare sus derechos fundamentales de petición e igualdad.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCION: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV- en cabeza de su director Ramón Alberto Rodríguez Andrade o quien haga sus veces, y el vinculado Director Técnico de Reparación de la UARIV Enrique Ardila Franco o quien haga sus veces.

PRETENSION: se ordene a la UARIV dar respuesta de fondo a la solicitud elevada por la accionante el pasado 03 de marzo de 2021.

HECHOS RELEVANTES: Como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. La actora interpuso derecho de petición el pasado 03 de marzo de 2021 (exp digital, pdf 003, pág 3) ante la unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-.
2. Manifiesta la actora que a la fecha de presentación del escrito tutelar, la accionada UARIV no ha dado respuesta de fondo a la solicitud presentada.

TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 08 de abril de 2021 (archivo pdf 005 del expediente digital). La admisión fue notificada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV- y al Director Técnico de Reparación de la UARIV en debida forma tal y como consta en archivos pdf 006 y 007 del expediente digital, a su vez se informó

acerca de la existencia del presente trámite tutelar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Exp digital, pdf 009).

CONTESTACION

La accionada UARIV rindió informe el pasado 12 de abril de 2021, por intermedio de su representante judicial Vladimir Martín Ramos, en los siguientes términos (archivo pdf 010 del expediente digital):

1. Manifiesta que como requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras", esta debe haber presentado declaración ante el Ministerio Público y estar incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV, y que para el caso de la señora Ruth Gordons Castañeda, la misma no cumple con tal condición, por lo que no se encuentra incluida en dicho registro por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
2. Informa que una vez realizada la consulta en sus bases de datos, la señora Ruth Gordons Castañeda se encuentra en estado -no incluida- desde el 26 de septiembre de 2002, en el marco de la ley 387 de 1997, y que dicha decisión administrativa se encuentra fundamentada en la Resolución No. 11001-7759 del 03 de marzo de 2003 (exp digital, pdf 010, pág 13 y 14).
3. Que frente a la actuación administrativa anteriormente relacionada no se interpuso recurso alguno, por lo tanto, no es posible dar respuesta de fondo a la petición presentada por la accionante ante la inexistencia del mismo.
4. Anexa comunicación radicado 20217208037591 (página 9 y 10 del pdf 010 del expediente digital), mediante la cual aduce haber dado respuesta a la petición que dio origen al presente trámite constitucional.
5. Por último, manifiesta que conforme a los argumentos fácticos y jurídicos antes señalados debe negarse las peticiones incoadas por la accionante, toda vez que la Unidad ha realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones necesarias, evitando con ello se vulnere derecho fundamental a la actora.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6º de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURIDICO corresponde al despacho resolver lo siguiente:

¿Acreditó la UARIV haber dado respuesta de fondo a la solicitud presentada por la accionante el 03 de marzo del año en curso, y notificado en debida forma lo resuelto?

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental de petición, aquel que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, dicha norma está reglamentada por los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, así: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”*.

Así mismo, dicha normatividad desarrolla el derecho de petición en su artículo 14, señalando que como regla general toda petición debe resolverse en el término de 15 días hábiles, exceptuando las peticiones de documentos e información que deben resolverse en 10 días y las consultas, las cuales tienen prescrito un término de 30 días; y que, cuando no fuere posible resolverla en dicho término, deberá informarse de inmediato lo pertinente al interesado (antes del vencimiento del término señalado en la ley), exponiéndole las razones del caso y dándole a conocer el término razonable para resolverla, el cual no podrá exceder del doble del término inicialmente previsto. Sobre el tema el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que las autoridades peticionadas deben informar los inconvenientes y el tiempo en que se dará respuesta cuando no se pueda

resolver en el plazo establecido: “En relación con el término legal para suministrar respuesta, esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14° de la ley 1437 de 2011 que señala el término de quince días para dar respuesta a la petición. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”. De no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación en dicho término, la autoridad o el particular deberán explicar los motivos y señalar una nueva fecha en el cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es imperioso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud”. (Sentencia T-369 de 2013).

Aunado a ello, en pronunciamiento posterior, la Corte mediante la sentencia T- 903 de 2014 indicó que: “(...) la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz distinto de la acción de tutela, motivo por el cual quien resulte afectado por la vulneración de este derecho puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”. Así las cosas, se tiene que, no existiendo otro instrumento judicial para proteger el derecho de petición, por tratarse de un derecho fundamental cuya aplicación es inmediata, el mecanismo más adecuado es la acción de tutela.

Por otra parte, la honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el elemento esencial del mismo radica en la resolución pronta y oportuna por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de fondo, independientemente de que el sentido de la decisión sea positivo o negativo. Así entonces, luego de nada serviría dirigirse a una autoridad en particular con la esperanza de una respuesta pronta y eficaz, si ésta no resuelve dentro de los términos legales, o, cuando a pesar de hacerlo el contenido de la respuesta es vago, impreciso o se reserva el sentido de la decisión.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el núcleo esencial de este derecho reside en i) una resolución pronta y oportuna; ii) una respuesta de fondo, lo que implica que sea clara, precisa, congruente y consecuente; y iii) la notificación al peticionario (T-154 de 2018):

(i) Resolución pronta y oportuna. Es una obligación de las autoridades y de los particulares responder las peticiones en el menor tiempo posible, sin exceder el término de 15 días hábiles establecido en la ley, salvo excepciones legales.

(ii) Respuesta de fondo o material, requisito que se cumple siempre que la

contestación sea: a) clara, esto es, que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) **precisa, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruente, es decir, conforme con lo solicitado; y d) consecuente con el trámite en el que la solicitud es presentada**". (subrayado y negrilla propio)

(iii) Notificación de la decisión. Este requisito se satisface poniendo en conocimiento del ciudadano la respuesta de la autoridad o del particular, pues de ello se deriva la posibilidad del peticionario de presentar la respectiva impugnación.

No obstante lo anterior, el Decreto 491 de 2020, en su artículo 5 (declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-242 de 2020) estableció:

"...Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales..."

Siendo del caso mencionar que debido a la actual condición sanitaria mundial, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social en todo el territorio, y a la par, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó a través de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria declarada hasta el 31 de mayo 2021.

Esto significa que mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente, las peticiones presentadas dentro de ésta, o que se encuentren en curso, por regla general deberán ser resueltas dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

CASO CONCRETO

Se encuentra demostrado que la accionante Ruth Gordons Castañeda presentó derecho de petición ante la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas UARIV – el pasado 03 de marzo de 2021 (rad n° 2021-711-520753-2), tal y como consta en anexo allegado con el escrito de tutela visible a página 03 del archivo pdf 003 del expediente digital, mediante el cual solicita lo siguiente:

- i) “Definir y entregar respuesta de los recursos con respecto a mi caso”
- ii) “expedir copia de la resolución del hecho victimizante mediante de la resolución por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y manifestar cuales han cancelado”

Al respecto la UARIV en informe rendido el 10 de abril de 2021 tal y como consta en el archivo pdf 010 del expediente digital, afirma que mediante comunicación con Rad. 20217208037591 (pág 8 y 9, pdf 010 del expediente digital) dio respuesta a la petición radicada ante la entidad, informándole a la actora que no se evidencia que la interesada hubiese interpuesto ante la entidad recurso alguno, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo al respecto, y la misma fue notificada en debida forma el 12 de abril del año en curso a la dirección de correo electrónico aportada por la accionante, esto es, daniela.cely.1999@gmail.com, tal y como consta en la página 6 y 7 del pdf 010 del expediente digital, respuesta esta que corresponde a uno de los ítems planteados por la actora en su solicitud.

No obstante lo anterior, la accionada UARIV aporta en el informe rendido comunicación con número de radicado 20217207720171 de fecha 06 de

abril de 2021, dirigida a la señora Ruth Gordons Castañeda en respuesta al derecho de petición presentado el 3 de marzo de 2021 radicado 20217115207532, en la misma se resuelve el segundo ítem planteado por la accionante en la petición elevada el pasado 3 de marzo de 2021, anunciando remitir copia de la resolución N° 11001-7759 del 3 de marzo de 2003, sin embargo, sobre este particular no obra en el expediente prueba alguna que tal respuesta hubiese sido notificada el debida forma a la accionante, dado que, como se plasma en el párrafo que antecede, solo se avizora comprobante de envío y entrega de la comunicación con radicado 20217208037591 del 10 de abril de 2021.

Sobre el tema en particular la Corte Constitucional en sentencia T-230/20 puntualizó:

*"Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. **Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.** El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada".(negrilla y subrayado del despacho)*

Como se relacionó en la parte considerativa de la presente providencia, el núcleo esencial del derecho de petición reside, entre otros en la debida notificación de las resultas al peticionario, para lo cual la autoridad deberá realizar dicho trámite de conformidad con los estándares contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, situación que para el caso en concreto no se ha materializado, resultando así conculcado el derecho fundamental de petición de la señora Gordons Castañeda; no obstante, ha de precisársele a la accionante, que la naturaleza y el alcance del derecho fundamental de petición se concreta en la pronta respuesta por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud, y en el derecho que le asiste a la solicitante a obtener una respuesta de fondo, sin que ello implique que el sentido de la decisión le sea favorable.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, se ordenará al Director Técnico de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas Emilio Hernández Díaz o quien haga sus veces, que en un término de dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a notificar en debida forma el contenido de la comunicación con número de radicado 20217207720171 de fecha 06 de abril de 2021 a la dirección de correo electrónico suministrada por la accionante en su petición.

DECISIÓN

En mérito de anteriormente lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Ruth Gordons Castañeda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la UARIV - Director Técnico de Registro y Gestión de la Información Emilio Hernández Díaz o quien haga sus veces, que en el término de dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a notificar en debida forma el contenido de la comunicación con número de radicado 20217207720171 de fecha 06 de abril de 2021 a la accionante en la dirección de correo electrónico suministrada en su petición y a remitirle copia del acto administrativo anunciado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Si este fallo no fuere Impugnado, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ
Juez

Proyecto: STIV -GMG

Firmado Por:

LUISA FERNANDA NIÑO DIAZ

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 040 DE CIRCUITO LABORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA,
D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e1e210ac76f5097960565f5e0b00b4f45e5f5ac9c13e81cfef02d8b54753d4e0

Documento generado en 20/04/2021 04:03:49 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**